

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES
EXPEDIENTE: CM/SR/164/2016-MB
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

Vistos para resolver en definitiva los autos del expediente administrativo marcado con el número CM/SR/164/2016-MB, relativo al Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado en contra del **C. Martínez Rosales María Dolores**, con Registro Federal de Contribuyentes MARD790202HG7, quien se desempeñaba como Supervisor "A" adscrita a la Dirección de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por haber sido **Omiso** en la presentación de su Manifestación de Bienes por **Baja** del servicio público municipal.

RESULTANDO

PRIMERO.- En fecha seis de mayo del año dos mil dieciséis, se recibió en las oficinas que ocupa este Órgano de Control Interno, el oficio número **210094000/1706/2015**, de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, suscrito por el Lic. Luis Velasco Hernández, Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones, de la Dirección General de Responsabilidades, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el cual remite el listado de Servidores y Ex servidores Públicos que fueron Omisos o Extemporáneos en la presentación de su Manifestación de Bienes por Alta o Baja, y en el cual se encuentra relacionada la **C. Martínez Rosales María Dolores**, con el objeto de que se le instruya Procedimiento Administrativo Disciplinario, por haber sido **Omiso**, en la presentación de su manifestación de bienes por **Baja** del servicio público municipal, misma que debió haber presentado dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión o baja del empleo, cargo o comisión que desempeñaba como Supervisora adscrita a la Dirección de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza Estado de México.

SEGUNDO.- En fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis y con fundamento en los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 110, 111 y 112 fracción XVI y XVIII, 168 y 170 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2, 3 fracción V, 41, 42 fracción XIX, 43, 44 último párrafo, 47 tercer párrafo, 49 fracción VII, 52 segundo párrafo, 53, 59 fracción I, 63, 79 fracción II último párrafo, 80 fracción II y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 2, 3, 20, 30, 106, 113, 114, 124 y 129 fracciones I incisos a), b), c), d), e) y f) y II incisos a), b), c) y d) del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 29 fracción IV y 33 del Bando Municipal Vigente; el Contralor Municipal acordó iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del **C. Martínez Rosales María Dolores**, otorgándole en consecuencia el derecho a desahogar su Garantía de Audiencia en términos de ley.

TERCERO.- En fecha catorce del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 25 fracción I y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, le fue debidamente notificado en tiempo y forma a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, el oficio citatorio a Garantía de Audiencia número **CM/SR/GA/314/2016-MB**, de fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, documento mediante el cual se le hizo saber el día y la hora en que debería comparecer ante esta Contraloría Municipal a desahogar su Garantía de Audiencia, en términos de los artículos 129 fracción I incisos a), b), c), d), e) y f) y II incisos a), b), c) y d) del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señalándose para tal efecto las trece horas, del día veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, tal y como consta en la documental pública, consistente en la cédula de notificación, la cual obra debidamente agregada a los autos del expediente en estudio.

CUARTO.- En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, se hizo constar mediante Acta Administrativa la Comparecencia al desahogo de su Garantía de Audiencia de la **C. Martínez Rosales María Dolores**, ante este Órgano de Control Interno, que le fue conferida dentro del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, en términos de los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 109 fracción III y 113 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 129 fracción II incisos a), b), c) y d) del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, agotándose dentro de la misma las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como los alegatos correspondientes, teniéndose así por satisfecha su Garantía de Audiencia.-----

QUINTO.- Una vez cumplidas todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, así como los requisitos contenidos en el artículo 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mediante Acta Administrativa de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, este Órgano de Control Interno, acordó turnar el expediente CM/SR/164/2016-MB, a resolución definitiva, misma que ahora se pronuncia conforme a los siguientes:-----

CONSIDERANDOS

I.- La Contraloría Municipal de Atizapán de Zaragoza es competente para conocer, tramitar y resolver del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 110, 111, 112 fracciones XVI y XVIII, 168 y 170 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2, 3 fracción V, 41, 42 fracción XIX, 43, 47 último párrafo, 49 fracción VII, 52, 53 párrafos segundo y cuarto, 59 fracción II, 60, 63, 79 fracción III inciso a), 80 fracción II y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 2, 3, 22, 106, 132 fracción III, 136, 137 y 139 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 29 fracción IV y 33 del Bando Municipal vigente; 18 inciso d), 27, 28 fracción V y 29 fracción III, inciso c) del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza; así como el acta levantada con motivo de la primera sesión solemne de cabildo, de fecha primero de enero del año dos mil dieciséis, en el que se aprobó el nombramiento del Mtro. Arturo Millán Olivares como Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza y 5.1 del acuerdo tomado en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha veintidós de Enero de dos mil dieciséis, por medio del cual se delegan al Contralor Municipal, las facultades conferidas a la Presidenta Municipal; descritas en los artículos 44, 47, 52, 59, 75, 79, 80 y 80 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mismo que versara en investigar, identificar, instruir, citar a garantía de audiencia y determinar las responsabilidades de los servidores públicos, así como tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, imponiendo sanciones administrativas, disciplinarias, resarcitorias y aquellas derivadas de responsabilidad patrimonial, así como de conflicto de intereses, emitiendo la resolución administrativa que en derecho proceda, en contra de los sujetos descritos en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con motivo de las quejas y denuncias en las que les sea imputada conducta alguna, que sea atribuible a ser investigada y sancionada por contemplarse en los ordenamientos legales correspondientes.-----

II.- La irregularidad administrativa que se le atribuye a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, consiste en no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra establece: "**Artículo 80.- La Manifestación de Bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión;**...", lo anterior se deriva de los registros enviados mediante oficio número 210094000/1706/2016, de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, remitido a esta autoridad administrativa por el Director de Conflictos de Intereses de Manifestación de Bienes y Sanciones de la dependencia referida, descritas en el resultando primero de esta resolución, en el que se indica que fue Omiso en la presentación de su Manifestación de Bienes por Alta, por lo que se considera que ha incurrido en responsabilidad administrativa disciplinaria al no haber atendido lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación a lo dispuesto en el artículo 79 fracción III inciso a), 80 fracción I de la citada ley.-----

III.- Una vez iniciado el Procedimiento Administrativo, en el desahogo de su respectiva

Garantía de Audiencia, conferida en términos de ley, el día veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, la **C. Martínez Rosales María Dolores**, señaló: "no hice mi baja por que viene a solicitarla en Dirección de Administración, porque me dijeron que posiblemente me reinstalaban, y que ellos me llamaban por teléfono, tampoco sabía que debía hacer una baja, y si bien es cierto era Supervisora el puesto pero desempeñaba funciones de secretaria estopor instrucciones de la Directora, no por mi ya que no realizaba las funciones de supervisora solicito se me exima de cualquier sanción." (sic); En la misma diligencia y a efecto de agotar las etapas procesales correspondientes y de conformidad con lo establecido por los artículos 32, 33, 38, 129 fracción II inciso b) y 130 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se declaró abierta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas para que la **C. Martínez Rosales María Dolores** ofreciera las pruebas que a su derecho conviniera, por lo que en uso de la palabra el ex servidor público manifestó: "No tengo pruebas que ofrecer"; En virtud de lo anterior, este Órgano de Control Interno, determinó cerrar la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, otorgándole a su vez el derecho de formular alegatos en términos artículo 129 fracción II inciso c), mediante los cuales señalo: "Ratifico lo que manifesté anteriormente." Hecho lo anterior se tuvo por satisfecha su Garantía de Audiencia, tal y como consta en el acta respectiva del día veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, que obra debidamente agregada en autos del expediente que ahora se resuelve.

IV.- Al realizar el análisis lógico jurídico de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente en que se actúa, en relación a la responsabilidad de carácter administrativo atribuida a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, se tiene que el servidor público peticionado, dentro del desahogo de su respectiva Garantía de Audiencia señaló, "no hice mi baja por que viene a solicitarla en Dirección de Administración, porque me dijeron que posiblemente me reinstalaban, y que ellos me llamaban por teléfono, tampoco sabía que debía hacer una baja, y si bien es cierto era Supervisora el puesto pero desempeñaba funciones de secretaria estopor instrucciones de la Directora, no por mi ya que no realizaba las funciones de supervisora solicito se me exima de cualquier sanción." (sic); manifestaciones de las cuales se desprende, que el servidor público reconoce plenamente la falta en la que incurrió, al aceptar que no efectuó su manifestación de bienes por alta al ingresar al servicio público municipal; confesión expresa que hace prueba plena en términos de los artículos 38 fracción I, 39, 97, 98 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al haber sido hecha por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento sin coacción ni violencia y respecto de hechos propios; sirviendo como sustento para robustecer lo manifestado la Jurisprudencia número 71, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que dispone:

PRUEBA CONFESIONAL. INTERPRETACIÓN DEL NUMERAL 90 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ESTATAL.- Indudablemente que la norma 90 de la Ley de Justicia Administrativa Local indica que en los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional; pero, el precepto alude a la prueba confesional desahogada a través de la formulación de posiciones, es decir, mediante preguntas sobre hechos propios, sin referirse a la confesión derivada de los hechos aceptados o reconocidos por las partes en el proceso. Lo que hace válido considerar como medio probatorio, en el juicio contencioso administrativo, la confesión que los particulares o autoridades realicen, a través de manifestaciones expresas o tácitas, en la demanda, en la contestación de demanda o en cualquier otro documento del procedimiento, así como la que se externe en los documentos públicos que se aporten en el expediente del medio de defensa.

NOTA : El artículo 90 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, corresponde a los numerales 32 y 40 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado en vigor.

Recurso de Revisión número 49/988.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 18 de agosto de 1988, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 79/990.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 26 de julio de 1990, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 46/991.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 7 de

marzo de 1991, por unanimidad de tres votos.

Lo anterior toda vez que la **C. Martínez Rosales María Dolores**, reconoce plenamente que no efectuó su manifestación de bienes por baja y que si bien señala que su irregularidad se originó en virtud de se retiró del cargo motivo por el cual no presentó la manifestación de bienes por baja, dichos argumentos no son suficientes para desvirtuar la irregularidad que se le atribuye, dentro del presente procedimiento, por el contrario con los mismos sólo se acredita la irregularidad en la que incurrió el servidor público, consistente en haber sido omiso en la presentación de su manifestación de bienes por alta del servicio público municipal, obligación a la cual se encontraba sujeto derivado del cargo que desempeñaba como Supervisora "A" adscrita a la Dirección de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que textualmente establece: "**Artículo 79.- Tienen la obligación de presentar Manifestación de Bienes ante los órganos competentes, en la forma y plazos establecidos por la presente ley y bajo protesta de decir verdad:... Dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración de justicia y readaptación social;** en consecuencia dicho precepto lo sujetaba a cumplir con la obligación establecida en la fracción XIX del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades citada, mismo que dispone: "**Artículo 42.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrán, todo servidor público, sin perjuicio de sus general:...XIX. Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de Bienes en los términos que señala la Ley;...**" ello al desempeñar las actividades y/o funciones antes descritas, tenía como obligación presentar en la forma y dentro del término legal la correspondiente Manifestación de Bienes por Baja, sirviendo como sustento para robustecer lo manifestado la Jurisprudencia número 85, expuesta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que dispone:

MANIFESTACIÓN DE BIENES. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA DERIVA DE LA FUNCION A CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO.- Si bien es cierto que el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios obliga, a cada titular de las Dependencias del ejecutivo, precisar ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal, durante el mes de febrero de cada año, lo servidores públicos que están obligados a presentar la manifestación de bienes; también lo es, que conforme a lo dispuesto por el propio numeral es requisito indispensable que dichos servidores públicos deban tener a su cargo una o más de las funciones que previene el dispositivo legal en cita, es decir para que se configure la aludida obligación es necesario que el servidor público realice o ejecute alguna de las mencionadas funciones.

Recurso de revisión número 230 /992.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 19 de septiembre de 1992, por unanimidad de tres votos.

Recurso de revisión número 391/992.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 21 de enero de 1993, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 240/993.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 17 de junio de 1993, por unanimidad de tres votos.

Asimismo es aplicable la Jurisprudencia número 74 expuesta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que dispone:

MANIFESTACIÓN DE BIENES. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA POR DISPOSICIÓN LEGAL, SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO.- En términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, los servidores públicos sujetos a la obligación de presentar su manifestación de bienes, lo deben hacer por disposición de la referida Ley, sin que sea necesario que previamente se les comunique o avise de la existencia de dicha obligación. **Recurso de revisión número 78/990.-** Resuelto en sesión de la Sala Superior de 10 de julio de 1990, por unanimidad de tres votos.

Recurso de revisión número 89/990.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 24 de Julio de 1990, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 115/1991.- Resuelto en sesión de la Sala Superior de 04 de Julio de 1991, por unanimidad de tres votos.

Por lo que resulta inatendible su argumento para justificar la Omisión señalada, más aún cuando la propia ley es clara en cuanto al término para presentar la manifestación de bienes, y que en el presente caso no ocurrió, tan es así que el plazo legal con el cual contaba la **C. Martínez Rosales María Dolores**, para presentar su Manifestación de Bienes por Baja del servicio público municipal, transcurrió del día primero de enero al primero de marzo del año dos mil dieciséis, en este orden de ideas se tiene que el



servidor público, contó con un plazo suficiente para poder efectuarla, lo que en el presente caso no ocurrió por lo que en se actualiza la transgresión a lo dispuesto por la fracción I del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establece: **"Artículo 80.- La Manifestación de Bienes deberá presentarse en los siguientes plazos: I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión ..."**; lo anterior concatenado a lo referido en el oficio número 210094000/1706/2016, de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, donde se anexa copia certificada de la hoja de datos contenidos en el Sistema Integral de Manifestación, documental pública que en términos de los artículos 32, 38 fracción II, 57 y 100 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, hace prueba plena en contra de la **C. Martínez Rosales María Dolores** y sirve de sustento para acreditar la irregularidad que se le atribuye, consistente en haber sido omiso en la presentación de su manifestación de bienes por baja del servicio público municipal; asimismo por cuanto hace a la instrumental de actuaciones, la cual de conformidad a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Adjetivo de la Materia, esta Autoridad se encuentra obligado a tomar en consideración y que consiste en el conjunto de actuaciones que obran en el expediente que ahora se resuelve, se tiene que de dichas actuaciones, no se desprende algún elemento de convicción que desvirtúe la irregularidad imputada al sujeto a procedimiento; por último y por cuanto hace a la presuncional en su doble aspecto legal y humana, se tiene que de los hechos comprobados no se derivan presunciones a su favor y menos que exista una relación entre ellas que lleve al conocimiento de un hecho diverso a favor del ex servidor público sujeto al presente procedimiento, así como tampoco se tienen algún precepto legal que establezca expresamente una presunción favorable a sus intereses; en este orden y en virtud de los razonamientos vertidos con antelación, se tiene que ha quedado debidamente acreditada la irregularidad en la que incurrió la **C. Martínez Rosales María Dolores**, al haber sido Omiso en la presentación de su Manifestación de Bienes por Baja del Servicio Público Municipal.

V.- Este Órgano de Control Interno previo análisis de todas y cada una de las constancias que obran en el expediente y una vez que fueron valorados los elementos de juicio, de los que se deriva que queda total y debidamente acreditada la responsabilidad de carácter administrativo en que incurrió la **C. Martínez Rosales María Dolores** aunado al hecho que una vez revisados los archivos de esta Contraloría Municipal se tiene que el citado servidor público, NO cuenta con un antecedente de inobservancia a lo previsto por el dispositivo legal 42 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin embargo este Órgano de Control Interno determina procedente sancionarlo, con la sanción mínima que para estos casos prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en su artículo 49 fracción VII y 80 penúltimo párrafo, siendo esta una sanción pecuniaria consistente en una multa equivalente al pago de quince días del sueldo base mensual que tuvo asignado, sin embargo a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la ley en comento y toda vez que el servidor público, acepta su irregularidad al manifestar dentro del desahogo de su Garantía de Audiencia que presento la manifestación de bienes por baja de manera extemporánea del servicio público municipal en tiempo y forma, al señalar: **"no hice mi baja por que viene a solicitarla en Dirección de Administración, porque me dijeron que posiblemente me reinstalaban, y que ellos me llamaban por teléfono, tampoco sabía que debía hacer una baja, y si bien es cierto era Supervisora el puesto pero desempeñaba funciones de secretaria estopor instrucciones de la Directora, no por mí ya que no realizaba las funciones de supervisora solicito se me exima de cualquier sanción ... (sic)**, este Órgano de Control Interno Municipal, determina procedente sancionar a la **C. Martínez Rosales María Dolores** únicamente con las dos terceras partes de la sanción que le es aplicable y al ser esta la mínima, se impone una sanción pecuniaria consistente en una multa equivalente al pago de diez días del sueldo mensual que tiene asignado, correspondiente a la cantidad de \$3,6660.00 (Tres Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se corrobora, con el Oficio numero DAyDP/SRH/DRL/5845/2016, de fecha primero de agosto del año dos mil dieciséis, del que se desprende que la **C. Martínez Rosales María Dolores**, ocupaba el puesto de Supervisora "A" adscrita a la Dirección de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con un sueldo base mensual de \$11,000.00 (Once Mil Pesos 00/100 M.), cantidad que deberá ser liquidada en la Tesorería Municipal de este H.



Ayuntamiento, dentro del plazo de **diez días hábiles**, contados a partir del día siguiente al artículo 29 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, apercibido que para el caso de no hacerlo así, se le hará efectiva a través del procedimiento económico coactivo de ejecución con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 30 y 376 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, asimismo deberá de entregar copia simple del correspondiente recibo de pago a esta Contraloría Municipal; consecuentemente y toda vez que esta autoridad determinó precedente imponer la sanción mínima aplicable al caso concreto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 fracción VII, 69 y 80 párrafo penúltimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, no es necesario entrar al estudio del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo anterior, atendiendo al criterio planteado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en la Jurisprudencia número SE-74 que dispone:-

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. CUANDO LAS AUTORIDADES DETERMINAN IMPONER EL MÍNIMO COMPRENDIDO EN LA LEY, NO ESTÁN OBLIGADAS A RAZONAR SU INDIVIDUALIZACIÓN.
El principio de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, consagrado por el numeral 16 de la Ley Suprema de la Nación, tiene como finalidad primaria, evitar a toda costa la arbitrariedad y el capricho en la actuación de las autoridades públicas. Es así, que en tratándose de la imposición de sanciones, el principio fundamental en comento, implica la obligación de las autoridades, de expresar pormenorizadamente los factores que influyeron en su ánimo sancionador, ponderando las circunstancias externas de la infracción y las particulares del infractor. Dentro del ordenamiento jurídico procesal administrativo del Estado de México, la potestad sancionadora del poder público, no implica una libertad absoluta en la fijación de sanciones, pues su arbitrio se constriñe al resultado de la valoración de los elementos previstos en el numeral 137 del Código de Procedimientos Administrativos Local, mismos que consisten en: a) La gravedad de la infracción en que se incurra; b) Los antecedentes del infractor; c) Las condiciones socio-económicas del infractor; d) La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, en su caso; y e) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere. En consecuencia, cuando las autoridades de la administración pública estatal o municipal de la entidad, una vez acreditada una conducta por parte de un particular que quebranta lo especificado en la legislación administrativa o fiscal, determinan imponer una sanción que se ubica en un grado superior al mínimo señalado en el rango que las normas establezcan, se encuentran compelidas a pormenorizar los elementos que influyeron en su ánimo para detener su arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la sanción legalmente prevista. Empero, cuando la autoridad administrativa estima justo imponer una sanción que se ubica en el menor grado del referido rango, no existe obligación de su parte, de establecer los razonamientos que le llevaron a tal decisión y por ende, la omisión de invocarlos en el escrito en que se contenga la sanción, no conduce a su invalidez, puesto que es evidente que el criterio de la sancionadora no provoca agravio alguno en el sujeto pasivo y por el contrario, se infiere que tuvo la mayor benevolencia para el sancionado, una vez que quedó acreditado su desapego a las normas fiscales o de gobierno, amén de que en ningún momento queda en riesgo su seguridad jurídica.

Recurso de Revisión número 118/98.- Resuelto en sesión de la Primera Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 527/99.- Resuelto en sesión de la Primera Sección de la Sala Superior de 23 de septiembre de 1999, por unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 898/99 y 900/99 acumulados.- Resuelto en sesión de la Primera Sección de la Sala Superior de 20 de enero de 2000, por unanimidad de tres votos.

En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO.- Ha quedado acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria en que incurrió la **C. Martínez Rosales María Dolores**, al comprobarse dentro del presente procedimiento administrativo disciplinario que fue **Omiso** en la presentación de su manifestación de bienes por **Baja** del servicio público municipal.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 fracción VII, 69 y 80 penúltimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se sanciona pecuniariamente con el pago de las dos terceras partes de la sanción aplicable y al ser esta la mínima, se impone a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, sanción consistente en una multa equivalente al pago de diez días del sueldo



base mensual que tenía asignado, correspondiente a la cantidad de \$3,666.00 (Tres Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N), cuyo pago deberá realizar en la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le sea notificada la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, debiendo entregar copia simple del correspondiente recibo de pago a esta Contraloría Municipal.

TERCERO.- En caso de no cubrir la sanción por ley impuesta en los términos señalados, previa notificación en tiempo y forma, envíese copia certificada de la presente resolución a la Tesorería Municipal para que se le requiera el cobro correspondiente a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los artículos 68 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 10 y 376 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

CUARTO.- Notifíquese personalmente a la **C. Martínez Rosales María Dolores**, en calle **México, número 13, colonia Adolfo López Mateos, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México**, en términos del artículo 25 fracción I y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, haciéndole saber que cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, para que en caso de inconformidad interponga el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o el Juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos de los artículos 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 139, 186 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.4, 1.5, 2.1 y 2.4 del Acuerdo que establece los Lineamientos de los Registros de Procedimientos Administrativos y de Seguimiento de Sanciones, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil cuatro, una vez que cause ejecutoria la presente regístrese lo determinado en la misma en el Sistema Integral de Responsabilidades, denominado SIR, con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

SEXTO.- Una vez que la presente resolución quede firme envíese copia de la misma a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de este H. Ayuntamiento, a efecto de que se anexe e inscriba la sanción impuesta en el expediente personal del **C. Martínez Rosales María Dolores**, debiendo informar a esta dependencia respecto de su cumplimiento.

SÉPTIMO.- Cumplidos los puntos resolutive que anteceden, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, previo registro en el libro de estilo que para tal efecto lleva esta Contraloría Municipal.

Así lo resolvió y firma el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.

**CÚMPLASE
ATENTAMENTE**



**MTRO. ARTURO MILLAN OLIVARES
CONTRALOR MUNICIPAL.**

LFGR/OCV/2018